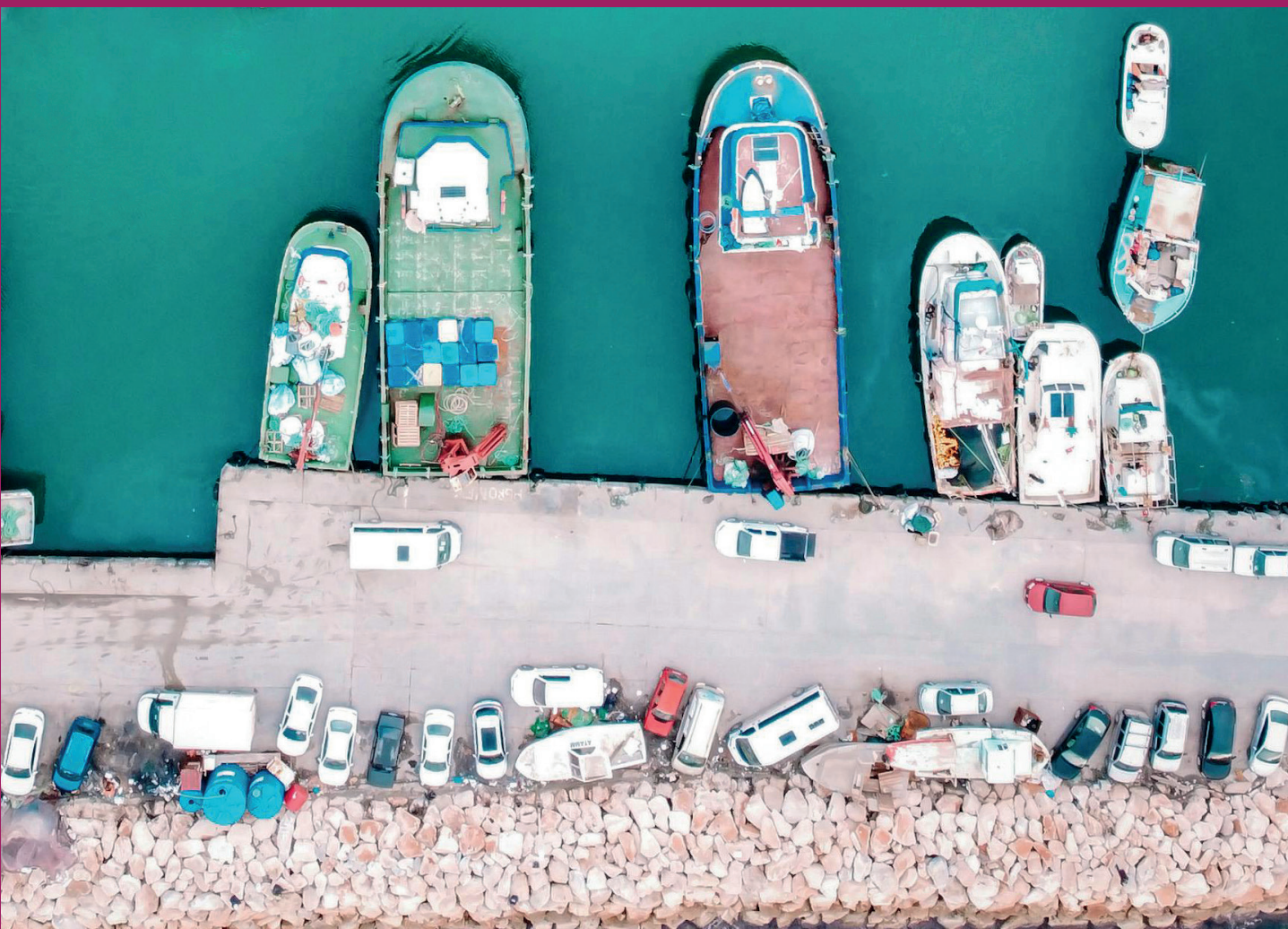




Misceláneos

Escenarios prospectivos sobre la progresión del crimen organizado en el sector petrolero ecuatoriano al 2030

Prospective scenarios on the progression of organized crime in the Ecuadorian oil sector by 2030

Ricardo Revelo-Suárez¹

Recibido: 13 de febrero de 2025

Aceptado: 20 de julio de 2025

Publicado: 31 de mayo de 2026

Resumen

Introducción: el estudio profundiza en el análisis de la progresión delictiva en dos zonas petroleras de Ecuador; se enfoca la interacción entre el crimen organizado, los recursos naturales estratégicos y las dinámicas sociales locales. **Objetivo:** analizar los escenarios prospectivos sobre la progresión del crimen organizado en el sector petrolero ecuatoriano al 2030 en las zonas petroleras de Orellana y Sucumbios. **Metodología:** se adopta un enfoque cualitativo y prospectivo estructurado bajo el modelo de “etapas fundamentales de la prospectiva estratégica”. Además, se emplean herramientas prospectivas como MICMAC y MACTOR, y herramientas de análisis como PESTEL y el FODA, que se complementan con el método morfológico para construir escenarios posibles. **Conclusiones:** el crimen organizado se consolida en Sucumbios y Orellana, y afecta directamente las operaciones petroleras, pese a las ligeras mejoras de las políticas de seguridad implementadas, donde el crimen organizado mantiene un ritmo moderado hacia el sector petrolero en estas provincias. La coordinación entre el Gobierno nacional, las empresas petroleras y las comunidades locales ha permitido contener parcialmente la expansión del crimen organizado en estas zonas. Sin embargo, se requiere establecer políticas públicas enfocadas en la problemática, y acciones sostenibles y equitativas dentro de las comunidades afectadas.

Palabras clave: conflicto social; defensa; Ecuador; petróleo; prevención del crimen

Abstract

Introduction: the study delves into the analysis of criminal progression in two oil zones in Ecuador, with a focus on examining the interaction between organized crime, strategic natural resources and local social dynamics. **Objective:** analyze prospective scenarios on the progression of organized crime in the Ecuadorian oil sector by 2030 in the oil zones of Orellana and Sucumbios. **Methodology:** a qualitative approach and prospective structure is adopted under the “Fundamental Stages of Strategic Prospective” model. In addition, prospective tools such as MICMAC and MACTOR are used, as well as analysis tools such as PESTEL and SWOT that are complemented by the morphological method to build possible scenarios. **Conclusions:** organized crime is consolidated in Sucumbios and Orellana, directly affecting oil operations, despite the slight improvements in the security policies implemented, where organized crime towards the oil sector in these provinces maintains a moderate pace. Thus, the coordination between the national government, oil companies and local communities has made it possible to partially contain the expansion of organized crime in these areas. However, the establishment of public policies focused on the problem and sustainable and equitable actions within the affected communities is required.

Keywords: social conflict; defense; Ecuador; oil; crime prevention

¹ Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador, ricardorevelos3041@gmail.com, orcid.org/0009-0003-8545-5273

Introducción

La influencia del crimen organizado transnacional se ha expandido en las regiones fronterizas de Ecuador, y pretende afectar a sectores estratégicos como la industria petrolera. La debilidad en el control fronterizo, las políticas estatales insuficientes y la limitada cooperación bilateral han consolidado a economías ilícitas en zonas de alta importancia económica y geopolítica (Rivera y Bravo 2020).

Orellana y Sucumbíos, claves en la producción petrolera, muestran señales de infiltración criminal (Grupo Faro 2019; Jurado 2021). Orellana aún registra baja presencia del crimen organizado, pero la fragmentación social y la falta de Estado favorecen su avance. En Sucumbíos, ya operan grupos transnacionales como los Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC que disputa el control territorial con bandas nacionales (Fundación Periodistas Sin Cadenas 2023).

El impacto de esta criminalidad en el sector petrolero se intensifica con la expansión de actividades ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y el control territorial. En regiones con baja presencia institucional, estos grupos no solo explotan los recursos naturales, sino que buscan legitimarse ante las comunidades locales, ofreciendo protección y recursos económicos a cambio de apoyo y colaboración (Garzón 2018). Esta estrategia refuerza su capacidad de consolidación territorial y afecta directamente la seguridad y gobernanza en las áreas petroleras de Ecuador.

Desde una perspectiva internacional, el caso de Ecuador presenta similitudes con otros países afectados por dinámicas criminales en sus sectores estratégicos. En Nigeria, el delta del Níger ha sido escenario de conflictos entre milicias locales y empresas petroleras, debido a la explotación de recursos naturales sin beneficios equitativos para las comunidades (Marcelles 2021). De manera similar, en Venezuela, grupos armados y redes criminales han logrado un alto nivel de control sobre áreas petroleras, lo que ha debilitado la economía y ha generado crisis sociales (Rendón, Sandín y Fernández 2020). Estos antecedentes evidencian la urgencia de analizar los factores que facilitan la penetración del crimen organizado en el sector petrolero ecuatoriano.

A partir de este contexto, en esta investigación se plantea como pregunta de investigación ¿cómo podría evolucionar al 2030 la presencia del crimen organizado en las zonas petroleras de las provincias de Orellana y Sucumbíos, considerando sus vulnerabilidades actuales y su importancia estratégica para la economía nacional y local? El objetivo general es analizar los escenarios prospectivos sobre la progresión del crimen organizado en el sector petrolero ecuatoriano al 2030 en las zonas petroleras de Orellana y Sucumbíos. Los específicos, diagnosticar los factores críticos y actores clave que facilitan la expansión del crimen organizado en estas áreas; identificar los escenarios prospectivos (pesimista, tendencial y apuesta) sobre el impacto del crimen organizado en la seguridad y gobernanza del sector petrolero, y evaluar los factores estructurales y dinámicos que configuran el entorno de riesgo en estas regiones.

El estudio tiene relevancia en tanto analiza escenarios potenciales de alto riesgo para la seguridad nacional, así como la inestabilidad de la gobernanza en provincias estratégicas

como Sucumbíos y Orellana. Ambas mantienen un rol crítico en la dinámica nacional por los recursos naturales que poseen, en especial, los minerales y el petróleo, pero también por su ubicación estratégica en la frontera con Colombia. Este factor expone a ambas provincias a constantes amenazas del crimen organizado, lo que conlleva a una inestabilidad productiva en las localidades; de tal modo que el análisis de la problemática evidenciada es relevante para diseñar estrategias que fortalezcan la gobernabilidad y la promoción del desarrollo sostenible de Ecuador.

Marco teórico

La delincuencia organizada comprende redes criminales estructuradas involucradas en actividades ilícitas y se extiende a nivel transnacional (INTERPOL 2024). Se conceptualizan como grupos organizados con jerarquías claras que buscan beneficios económicos mediante actividades delictivas (Cárdenas et al. 2023).

En el estudio reciente sobre violencia y criminalidad de Mejía (2021) se ha vuelto común hablar de *gobernanza criminal*, un concepto que intenta capturar algo que, aunque parece nuevo, en realidad lleva tiempo gestándose, como la capacidad de ciertos grupos no estatales para ocupar espacios donde el Estado llega tarde, llega poco o simplemente no llega. Este término hace referencia a cómo los grupos criminales ejercen poder político y social en áreas estratégicas, llenando los vacíos dejados por el Estado. Estos grupos, además de operar en actividades ilícitas como el narcotráfico y minería ilegal, asumen roles de mediación comunitaria, resolución de conflictos e incluso prestación de servicios básicos.

Estos actores recurren a la intimidación, se involucran en asuntos cotidianos, intervienen en disputas locales y generan reglas que, con el tiempo, terminan funcionando como referencia para la comunidad (Ferreira 2025). Esta combinación de coerción y forma de “arreglo social” ayuda a explicar por qué algunas poblaciones terminan aceptando, o al menos tolerando, su presencia.

De manera complementaria, desde una perspectiva teórica clave para comprender la dinámica de tensiones entre grupos, el conflicto entre grupos surge por la competencia real por recursos escasos a nivel simbólico, social o material generado por intereses particulares, donde la competencia forja la cohesión del grupo e incrementa rivalidad hacia el contrario (Jackson 2020). Como hallazgo, se obtiene que, desde la teoría, un conflicto no necesariamente es inevitable ni permanente, lo que indica que se requiere la cooperación mutua. Aunque el análisis no contempla ejemplos prácticos a nivel histórico o cultural, por ejemplo, sí expone el experimento clásico de Sherif (“Robber’s Cave”) que otorga puntos clave para reducir el conflicto.

Desde el enfoque de las nuevas guerras, las organizaciones criminales actuales funcionan con una estructura más dispersa y plástica. Pueden adaptarse, negociar o confrontar según el entorno, lo que les da una capacidad notable para mantenerse activas incluso en escenarios cambiantes (Carvajal y Maldonado 2023).

Informes recientes advierten que ciertos grupos armados aprovechan zonas ecológicas y fronterizas para instalar formas de regulación criminal asociadas al manejo de recursos naturales (Amazon Watch y Amazon Underworld 2025). En conjunto, estas apreciaciones permiten entender cómo se configuran órdenes criminales que influyen en la vida social y económica, aun cuando la institucionalidad formal no logre contenerlos por completo.

La literatura señala, además, que ciertos sectores estratégicos —particularmente aquellos vinculados a recursos de alto valor— tienden a convertirse en espacios atractivos para actores criminales. En algunos contextos se aprecian debilitamiento de las instituciones estatales y falta de un control efectivo sobre las dinámicas empresariales (Rivera, Ormaza y Contero 2023).

En este contexto, las amenazas emergentes se definen como los riesgos o desafíos nuevos y en evolución que pueden tener un impacto significativo en la seguridad, estabilidad y bienestar de las sociedades, gobiernos y economías. Pueden surgir debido a cambios en la tecnología, el medio ambiente, la economía o el panorama geopolítico. Se caracterizan por ser dinámicas y pueden no estar completamente comprendidas o previstas, lo que dificulta su gestión y mitigación (World Economic Forum 2020).

De ahí que resulta pertinente anticipar y analizar escenarios futuros de las actividades delictivas desde enfoques como la prospectiva. Esta metodología permite identificar tendencias y cambios potenciales en ámbitos políticos, económicos y sociales. Promueve una construcción colectiva de futuros deseables mediante la participación activa de actores, desde comunidades locales hasta organismos internacionales, y busca soluciones integradas para problemas complejos (Mojica 2005). Se enfatiza en implementar estrategias concretas para guiar a la sociedad hacia estos futuros visionados. Mediante este enfoque, se busca no solo responder a problemas actuales sino también reestructurar el entorno para reducir la viabilidad criminal, y contribuir a un futuro más seguro y próspero.

Metodología

En la investigación se adopta un enfoque cualitativo y prospectivo, a fin de analizar y anticipar escenarios al 2030 sobre la progresión delictiva en las zonas petroleras de Sucumbíos y Orellana. El marco metodológico se estructura bajo el modelo de “etapas fundamentales de la prospectiva estratégica”, de Francisco José Mojica, que guía el análisis a través de fases como identificación de tendencias, factores de cambio y variables estratégicas. Además, se analizan actores clave, se construyen escenarios mediante el método morfológico y se diseñan insumos para generar estrategias (Mojica 2005).

Para garantizar la solidez del análisis, se emplean herramientas prospectivas como MIC-MAC y MACTOR, para evaluar interacciones entre variables y actores (Godet 2000). Además, se utiliza el análisis PESTEL para evaluar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, y el FODA prospectivo identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas futuras en el sistema (Univalle 2015).

Estas herramientas se complementan con el método morfológico para construir escenarios posibles (Velosa y Pachón 2023), realizar análisis de datos geográfico, estadísticas delictivas, entrevistas con expertos en seguridad e industria petrolera y con habitantes de las zonas de estudio. Este enfoque integral mapea tanto el estado actual como posibles evoluciones del problema proporcionando insumos para toma de decisiones estratégicas.

Resultados y discusión

En este apartado se exponen los principales resultados y discusión obtenidos tras el proceso investigativo. En un primer momento, se explica el contexto del análisis desde el uso de las herramientas PESTEL y FODA, en función de dos variables cualitativas: determinación de tendencias y factores de cambio. Estas variables evidencian cómo se halla la problemática de la expansión del crimen organizado en zonas petroleras amazónicas.

Posteriormente se realiza el análisis desde el MICMAC y sus variables estratégicas como contexto: sinergia entre la seguridad y el sector petrolero, relaciones operativas y financieras de las estructuras criminales, disidencias de las FARC, eficacia de las políticas de seguridad, infraestructura y seguridad de instalaciones petroleras, presencia de organizaciones criminales transnacionales y niveles de corrupción en las instituciones gubernamentales. El análisis permite identificar las variables más influyentes entre el crimen organizado y la seguridad del área petrolera, con enfoque a determinar los factores que sostienen el riesgo, y desde dónde debe ejecutarse el esfuerzo de control y gobernanza.

Seguidamente, se incorpora el programa MACTOR para analizar cómo interactúan los actores clave del territorio: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Petroecuador, contratistas petroleros, comunidades amazónicas, estructuras criminales transnacionales, gobiernos locales e instituciones nacionales de seguridad. Este método permite visualizar sus intereses, tensiones y posibles alianzas, aportando una base más sólida para anticipar cómo podrían posicionarse frente a la evolución del crimen organizado, y para sustentar la construcción de los escenarios prospectivos al 2030.

Finalmente, el análisis morfológico integra los resultados anteriores y combina las trayectorias posibles de cada dimensión para visualizar tres rutas plausibles hacia el 2030. El escenario más crítico muestra un deterioro acelerado marcado por escasa coordinación institucional y el fortalecimiento de estructuras criminales. El escenario intermedio refleja la continuidad de la situación actual, con avances parciales, pero vulnerabilidades persistentes. El escenario de apuesta plantea la posibilidad de mejoras graduales si se fortalecen los vínculos entre seguridad y sector petrolero, y se reduce el margen de acción de los grupos delictivos.

Determinación de tendencias

En el nororiente ecuatoriano, Sucumbíos y Orellana enfrentan una creciente amenaza debido a la expansión de grupos delictivos nacionales e internacionales (Bravo 2023). La presencia de estas estructuras delictivas en zonas de extracción se ve facilitada por el tráfico de drogas y armas, lo que incrementa ataques y sabotajes.

La situación se agrava debido a la debilidad institucional y presencia limitada del Estado en estas áreas. Esto permite a los grupos criminales operar con relativa impunidad (Tapia y Fierro 2024). Un factor crítico que facilitaría expandir el crimen organizado en el sector petrolero de Orellana y Sucumbíos es la percepción errónea de seguridad por parte del Estado y empresas petroleras (Valencia 2024).

La falta de planes de seguridad actualizados y protocolos específicos incrementa la vulnerabilidad del sector petrolero, clave para la economía nacional (Banco Central del Ecuador 2024). Además, la deficiente coordinación entre organismos de seguridad y empresas petroleras debilita la capacidad de respuesta ante potenciales amenazas (López 2024). Esta situación se ve agravada por la presencia de autoridades locales coludidas con estructuras criminales, lo que facilita la expansión del crimen organizado (Tapia y Fierro 2024).

A pesar de la riqueza en recursos naturales, las comunidades indígenas de Sucumbíos y Orellana presentan divisiones internas, derivadas de diferencias en sus modelos de desarrollo y conflictos de intereses. Estas fracturas debilitan la capacidad de organización y resistencia de las comunidades frente a los desafíos económicos y sociales que enfrentan (Di Virgilio 2011).

Las organizaciones criminales han aprovechado estas tensiones para infiltrarse en las comunidades, presentándose como protectores de sus derechos frente a las empresas petroleras.

Esta estrategia es especialmente evidente en la minería ilegal y narcotráfico, donde estos grupos utilizan recursos naturales para obtener apoyo local, y brindan protección y beneficios económicos a cambio de lealtad (Buscaglia 2015). Con el tiempo, esta dinámica ha erosionado el papel legítimo del Estado y de las empresas en la región Amazónica, y ha consolidado un modelo de gobernanza paralela y delictiva (Montero y Mejía 2018).

El marco normativo de la Ley Amazónica ha promovido la creación de empresas locales dentro del sector petrolero, para garantizar la participación de la población amazónica en la cadena de valor del petróleo (Guadalupe 2023). Si bien esta iniciativa busca generar oportunidades económicas para la región, también abre la puerta al lavado de activos en un entorno donde la supervisión estatal es insuficiente y la corrupción sigue siendo un problema estructural (OECD 2023).

La falta de mecanismos de control adecuados ha permitido que estas dinámicas se fortalezcan y ha facilitado que las redes criminales se consoliden en el sector petrolero. Esto ha comprometido la transparencia de operaciones económicas y ha incrementado niveles de riesgo e inseguridad en la región (Tapia y Fierro 2024).

Factores de cambio

La frontera entre Ecuador y Colombia, caracterizada por una extensa red de pasos no autorizados, es determinante en la expansión del crimen organizado en el país, especialmente en su progresión hacia áreas de recursos no renovables (Conde y Orbe 2020). Esta porosidad fronteriza facilita la entrada de grupos armados colombianos, así como de redes criminales transnacionales, y crea un corredor estratégico para el tráfico de armas, drogas y personas (Garzón 2018).

Al mantener cercanía con actividades ilícitas en zonas petroleras, incrementa riesgos asociados a la violencia y la extorsión. Esto afecta a las comunidades, pero también las operaciones, lo que fortalece a los grupos criminales en sitios considerados estratégicos (Montero y Mejía 2018).

Ante la ausencia de soluciones, los habitantes están obligados a aceptar y tolerar a los grupos criminales que, a cambio, les ofrecen recursos económicos o protección (Castillo y Castro 2022). Este ciclo de exclusión y dependencia refuerza el actuar de la ilegalidad que opera con mayor facilidad, pero también agudiza la inseguridad y, a la vez, perpetúa cuestiones como la desigualdad (Álvarez 2024).

Los grupos criminales han identificado escenarios oportunos para explotar tensiones. Al mantener estrategias centradas en lo ambiental y social en las localidades, han generado una presencia más sostenida en la región, lo que ha permitido controlar territorios clave, además de acceso a recursos económicos provenientes de actividades ilícitas (Pino 2024).

Este fenómeno es recurrente en distintas regiones de la Amazonía, donde actividades ilícitas como la minería ilegal y otras se han elevado hasta camuflarse en la idea de protección comunitaria. La minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana ha aumentado significativamente, aprovechando la falta de presencia estatal y tensiones existentes entre comunidades y empresas extractivas (Fundación Ecociencia 2024). Esta situación no solo degrada el medio ambiente, sino que también fortalece la presencia de grupos criminales en la región (Fontaine 2019).

Determinación de factores internos y externos de la problemática

Las herramientas PESTEL y FODA permiten identificar los principales factores que interfieren de manera negativa a la sostenibilidad del sector petrolero y la seguridad en Sucumbíos y Orellana. Ofertan una visión adicional y cohesionada sobre amenazas clave respecto a la expansión del crimen organizado, falta de coordinación entre actores, la corrupción, aunque desde una mirada diferente. El PESTEL analiza los factores externos; es decir, en este caso los sociales y políticos. El FODA, en cambio, analiza la dinámica interna o bien las vulnerabilidades del sector.

Análisis PESTEL

En la tabla 1 se desarrolla el análisis PESTEL sobre factores externos de la problemática.

Tabla 1. Caso Waorani (n.o 1296-19-JP)

Dimensión PESTEL	Descripción	Variables identificadas	Actores relacionados
Político	Evaluación de políticas de seguridad, regulación del sector petrolero y respuesta institucional frente al crimen organizado.	- Eficiencia del sistema de inteligencia de Ecuador - Efectividad de políticas de seguridad	- Gobierno ecuatoriano
Económico	Análisis de dependencia del sector petrolero, impacto del crimen organizado en la economía y cooperación entre actores legales e ilegales.	- Relaciones operativas y financieras de estructuras delictivas - Sinergia entre organismos de seguridad y sector petrolero	- Petroecuador - Contratistas estratégicos de hidrocarburos
Social	Dinámicas comunitarias, tensiones derivadas de la Ley Amazónica y cooptación de comunidades por estructuras criminales.	- Comunidades locales y la Ley Amazónica	- Comunidades y líderes locales
Tecnológico	Infraestructura y tecnología aplicadas a la seguridad del sector petrolero y control territorial.	- Infraestructura y seguridad de instalaciones petroleras	- Fuerzas Armadas de Ecuador - Policía Nacional de Ecuador
Ambiental	Impactos ambientales de las actividades petroleras y su efecto en tensiones sociales y la cooptación de comunidades.	- Impacto ambiental como resultado de actividades petroleras	- Ministerio de Ambiente de Ecuador
Legal	Análisis de la Ley Amazónica, marcos normativos existentes y brechas legales que facilitan la operación del crimen organizado.	- Nivel de corrupción en instituciones gubernamentales	- Gobiernos locales

Fuente: elaboración propia.

Interpretación

El análisis PESTEL muestra que el avance del crimen organizado en el sector petrolero no se explica por un solo factor, sino por la suma de varios problemas que coinciden en el mismo territorio, como una presencia estatal débil, comunidades en conflicto, una fuerte dependencia del petróleo, fallas en sistemas de control y normas que no siempre se aplican como

deberían. Esta combinación crea espacios donde los grupos criminales encuentran libertad para moverse sin ser detectados.

El planteamiento obtenido en este estudio concuerda con investigaciones que señalan que la respuesta debe ser integral y sostenida, porque la amenaza surge de la forma en que todos estos factores se entrelazan en el día a día del territorio (Pérez 2022; Baños 2023).

En zonas donde el Estado casi no aparece, las tensiones comunitarias, el uso estratégico de la Ley Amazónica y la presión constante sobre las empresas terminan abriendo puertas que los actores delictivos aprovechan. Ahí es donde se infiltran, ya sea apoyando disputas locales o usando las instalaciones petroleras como corredores, puntos de paso o lugares de abastecimiento. A esto se suman problemas ambientales sin resolver y prácticas de corrupción que facilitan su permanencia.

En conjunto, PESTEL sugiere que si estas condiciones se mantienen, hacia el 2030 el sector petrolero podría enfrentar una presencia criminal más asentada y flexible.

Análisis FODA Prospectivo

La tabla 2 analiza los factores internos y externos con un enfoque en la evolución de estos al futuro.

Tabla 2. Análisis FODA progresión delictiva a zonas estratégicas

Aspectos	Elementos identificados	Proyección a futuro (argumentos prospectivos)
Fortalezas	- Capacidad operativa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para controlar territorios estratégicos.	- Con un fortalecimiento tecnológico y coordinación interinstitucional, estas capacidades podrían consolidarse para responder eficazmente al crimen organizado en áreas petroleras.
	- Sinergia potencial entre organismos de seguridad y sector petrolero para proteger instalaciones críticas.	- Una colaboración más estrecha puede minimizar vulnerabilidades, y mejorar la protección de infraestructura y continuidad de operaciones.
	- Marco normativo existente, como la Ley Amazónica, que otorga derechos preferentes a las comunidades locales.	- Si se aplica de manera eficiente, podría equilibrar las demandas sociales y ambientales con necesidades del sector y reducir tensiones locales.
	- Experiencia de Petroecuador y contratistas en operar en entornos de alta vulnerabilidad.	- El conocimiento acumulado puede ser clave para implementar mejores prácticas y mitigar riesgos futuros relacionados con la seguridad y gobernanza.
Oportunidades	- Uso de tecnologías avanzadas y <i>software</i> prospectivos para modelar escenarios y anticipar riesgos.	- Estas herramientas permitirán identificar tendencias emergentes y optimizar la planificación estratégica frente a amenazas.
	- Implementación de estrategias colaborativas entre Gobierno, comunidades locales y empresas petroleras.	- Un enfoque compartido generaría espacios para la gobernabilidad y cohesión social. Esto disminuiría el impacto generado por el crimen organizado en las localidades.

Tabla 2. (continuación)

Aspectos	Elementos identificados	Proyección a futuro (argumentos prospectivos)
Oportunidades	- Creación de alianzas a nivel internacional, a fin de desarticular las redes criminales transnacionales.	- Una cooperación internacional sostenida podría neutralizar estructuras delictivas que operan en territorios fronterizos y estratégicos.
	- Intercambio de información y compartimentación entre sistemas de inteligencia corporativa y nacional.	- Este intercambio podría facilitar respuestas rápidas y coordinadas frente a riesgos emergentes, y mejorar la capacidad de contención de amenazas en el sector petrolero.
	- Desarrollo de políticas públicas que prioricen la transparencia y reduzcan la corrupción institucional.	- Una gobernanza más transparente aumentará la confianza de los actores locales e internacionales, y fomentará un entorno más seguro para las operaciones.
Debilidades	- Fragmentación y tensiones internas en las comunidades locales, exacerbadas por intereses divergentes y abandono estatal.	- Si no se abordan, estas divisiones podrían ser explotadas por grupos criminales, lo que dificultaría la implementación de estrategias de desarrollo sostenible y seguridad.
	- Alta dependencia del Gobierno y fuerzas de seguridad para garantizar la estabilidad en las operaciones petroleras.	- Sin diversificación de capacidades locales, aumentará la vulnerabilidad de la región a políticas de crisis y de seguridad.
	- Niveles elevados de corrupción en las instituciones gubernamentales.	- La persistencia de la corrupción socavaría los esfuerzos de seguridad y gobernanza, lo cual permitirá que el crimen organizado amplíe su influencia.
	- Vulnerabilidad de la infraestructura petrolera frente a ataques y sabotajes.	- Si no se invierte en infraestructura más resiliente, sabotajes futuros podrían comprometer gravemente la economía nacional.
Amenazas	- Expansión de las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales transnacionales hacia áreas petroleras.	- De continuar sin control, estas estructuras podrían establecer bases operativas permanentes en Ecuador. Esto aumentaría costos de seguridad y afectaría la estabilidad local.
	- Incremento de actividades de minería ilegal y narcotráfico en zonas cercanas a la infraestructura petrolera.	- Estas actividades ilícitas podrían generar conflictos con comunidades locales y empresas, e incrementar la inestabilidad regional.
	- Sabotajes y extorsiones dirigidos a la infraestructura petrolera.	- Sin medidas preventivas, estas amenazas podrían convertirse en un obstáculo recurrente para el desarrollo del sector.
	- Impactos ambientales derivados de actividades petroleras que generarán conflictos sociales y mayor oposición local.	- Si no existe una gestión adecuada a nivel ambiental, los conflictos podrían generar mayor rechazo de las localidades en tema de las operaciones petroleras ejecutadas en sus zonas.

Fuente: elaboración propia.

Interpretación

El FODA prospectivo muestra que el futuro del sector petrolero frente al crimen organizado dependerá de cómo el país combine sus capacidades con los desafíos que ya están creciendo. Por un lado, Ecuador cuenta con fuerzas de seguridad con experiencia, empresas que conocen el territorio y herramientas legales que, si se aplican bien, podrían ayudar a ordenar la relación con las comunidades y proteger mejor las operaciones.

Sin embargo, también hay riesgos evidentes. Las divisiones internas en las comunidades, la poca presencia del Estado, la corrupción local y la vulnerabilidad de la infraestructura crean espacios que los grupos criminales pueden aprovechar para mezclarse con los conflictos sociales y avanzar sin ser vistos. A esto se suma que la minería ilegal, el narcotráfico y la expansión de las disidencias FARC ya están presionando estas zonas, lo que aumenta la posibilidad de sabotajes, extorsiones y control territorial.

En este sentido, este análisis sugiere que hacia el 2030 el sector petrolero podría fortalecerse si hay coordinación real entre Estado, empresas y comunidades; pero, si estas debilidades continúan, el crimen organizado tendrá cada vez más oportunidades para asentarse y operar dentro de estas áreas estratégicas.

Dentro de la realidad de Colombia, un estudio concuerda con el planteamiento de que la minería ilegal surgió como el escenario ideal para que la subversión diversifique sus fuentes de ingreso (Gómez 2013). Sin embargo, esta problemática es una oportunidad clave para desarrollar políticas de seguridad nacional que articulen intereses estratégicos por la explotación de minerales a los intereses de preservar el medio ambiente, con impacto importante a la seguridad nacional.

A partir del análisis de variables estratégicas obtenido mediante el *software* MICMAC, se evidencia, en primer lugar, la necesidad crítica de una sinergia entre las fuerzas de seguridad y el sector petrolero. Una cooperación eficaz puede mitigar riesgos asociados al crimen organizado y mejorar la protección de la infraestructura energética, considerando que el petróleo es un sector estratégico para la economía nacional.

Asimismo, se identifican las relaciones operativas y financieras de las estructuras criminales como un factor de alta incidencia. Los vínculos financieros y la cooperación arraigada dentro de las organizaciones criminales, incluidas redes transnacionales, representan una amenaza significativa para el sector petrolero (Luna y Luong 2022). Estas relaciones facilitan financiación, planificación y expansión de actividades ilícitas, lo que compromete la estabilidad del sector y la seguridad de las comunidades locales.

De igual manera, la presencia y expansión de las disidencias de las FARC constituye un elemento determinante. Estas estructuras buscan consolidar el control territorial en zonas limítrofes y expandir su influencia hacia regiones con recursos no renovables, como las reservas petroleras y mineras en Sucumbíos y Orellana. Su interés en estas áreas radica en los ingresos derivados de la explotación y extorsión de sectores estratégicos, que financian así sus operaciones (León 2021). Además, buscan cooptar a comunidades locales al ofrecer

protección y beneficios económicos a cambio de tolerancia o colaboración, lo que agrava las tensiones sociales y debilita la gobernanza en estas provincias.

Por otra parte, la eficacia de las políticas de seguridad se presenta como un factor decisivo. La ineficacia de las políticas públicas incentiva el accionar delictivo, ya que los grupos criminales se aprovechan de las falencias en la legislación y en los mecanismos de control. En contraste, medidas efectivas permiten disuadir estas actividades, proteger los sectores vulnerables y reducir el impacto del ilícito (Vestidora y Wolff 2024).

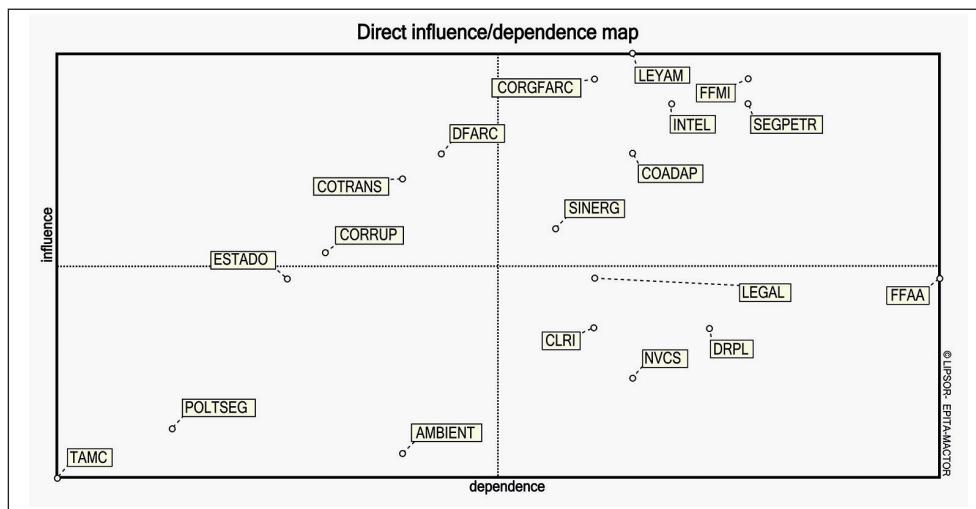
A esto se suman factores como la vulnerabilidad de la infraestructura petrolera. Este un tema de preocupación, por lo que resulta esencial dar garantías de seguridad en estas instalaciones para prevenir la extorsión, el sabotaje y otros delitos. Los grupos criminales buscan, por ende, intervenir las operaciones petroleras para generar mayores ingresos (Garrochamba 2021).

Igualmente, la presencia de organizaciones criminales transnacionales, motivadas por la ubicación estratégica y la disponibilidad de recursos, intensifica los riesgos en el área petrolera. Las organizaciones criminales debilitan la normativa y las estructuras. Esto requiere el diseño de estrategias de defensa sólida como el apoyo multinstitucional para reducir los efectos negativos (Marín y Astudillo 2024).

Finalmente, los niveles de corrupción en las instituciones gubernamentales agravan este escenario, ya que facilitan el accionar del crimen organizado dentro de las propias estructuras estatales y dificultan la aplicación de la ley. Abordar esta problemática es fundamental para garantizar una gobernanza eficiente y fortalecer la seguridad en las zonas vulnerables (Cárdenas et al. 2023b).

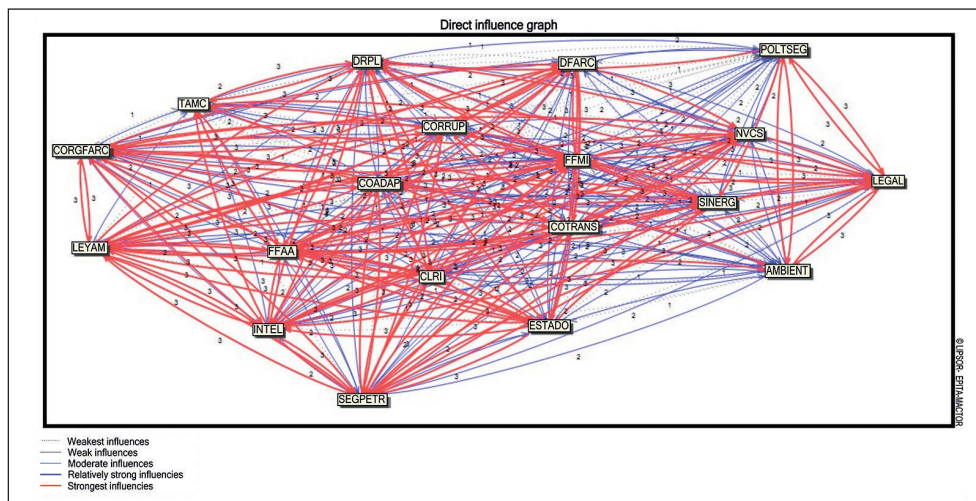
A continuación, en la figura 1 se describen gráficamente las variables del MIC/MAC según su influencia y grado de dependencia conforme la ponderación asignada por los expertos que participaron de la presente investigación.

Figura 1. Mapa y gráfico que muestran la influencia y dependencia de las variables



Fuente: elaboración propia.

Figura 1. (continuación)



Fuente: elaboración propia.

Interpretación

La cooperación entre fuerzas de seguridad y el sector petrolero es clave para mitigar la criminalidad. La presencia de disidencias de las FARC y grupos criminales transnacionales agrava la situación. Se aprovechan de la fragilidad institucional y recursos económicos del sector para consolidar su control territorial.

La eficacia de políticas de seguridad es determinante en este contexto. Mientras que una implementación deficiente fortalece la impunidad y fomenta el accionar criminal, estrategias sólidas y bien ejecutadas pueden actuar como elemento disuasivo en áreas estratégicas. Sin embargo, la corrupción en distintos niveles de gobierno debilita estos esfuerzos, facilita infiltración del crimen organizado y erosiona la gobernanza en la región.

Finalmente, las redes operativas y financieras del crimen organizado amplifican los riesgos. Estas estructuras transnacionales explotan las tensiones sociales y debilidad institucional para expandirse, lo cual incrementa la dependencia de comunidades locales y profundiza la inseguridad en la región.

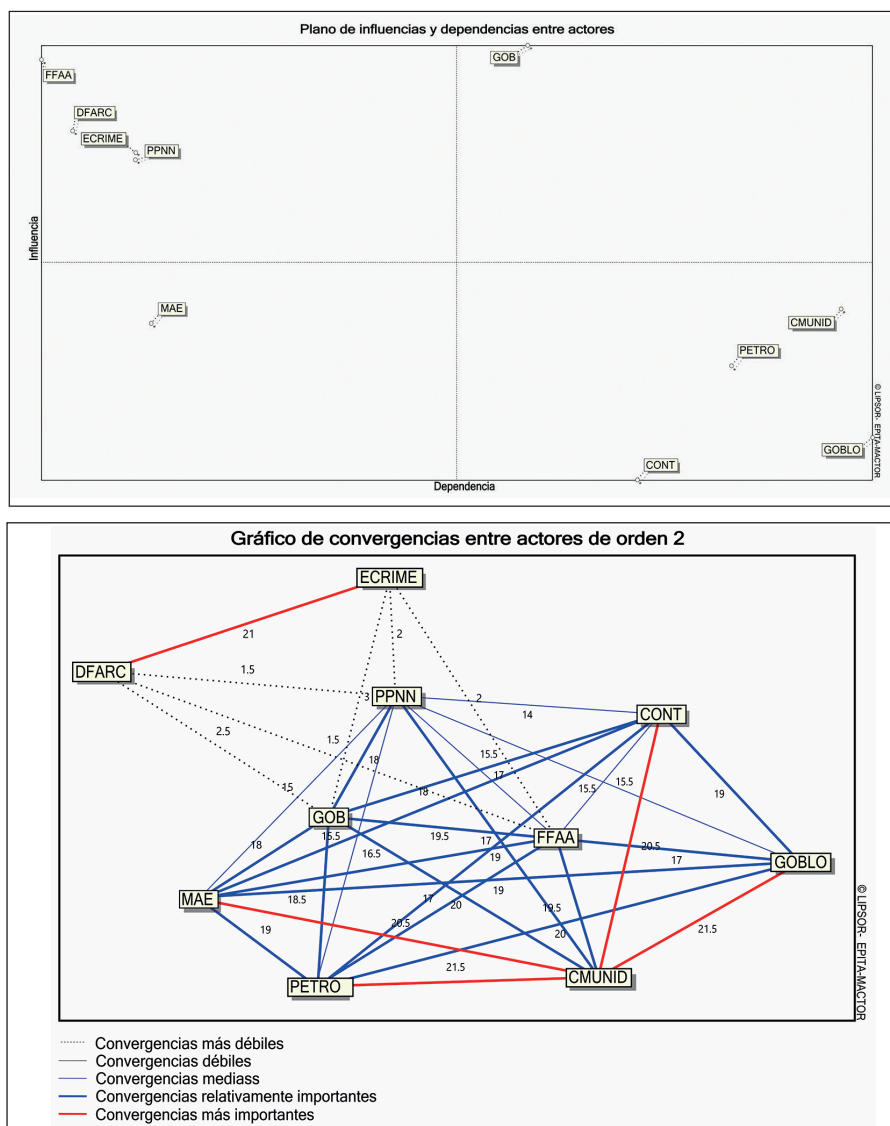
La investigación de Rivera y Bravo (2020) concuerda con el planteamiento de este estudio cuando se señala que la corrupción dentro de los estamentos de gobierno es uno de los factores que debilitan los esfuerzos, pero añade que el Estado ecuatoriano debe evaluar este factor, además de la ausencia de una ley de inteligencia y la aprobación de una ley de extinción de dominio, entre otras, para confrontar al crimen organizado transnacional.

Análisis de actores clave

Interpretación de resultados del software MACTOR

Los expertos que participaron en el análisis y ponderación de los actores clave en la problemática identificaron los siguientes resultados (figura 2).

Figura 2. Mapa y gráfico de influencia y dependencia de actores



Fuente: elaboración propia.

Interpretación

El análisis de actores clave mediante el *software* MACTOR revela una compleja red de influencias y dependencias en seguridad y el sector petrolero en Sucumbíos y Orellana. El Gobierno nacional, como actor central con alta influencia y dependencia, enfrenta el desafío de liderar políticas efectivas mientras coordina de manera reactiva con fuerzas de seguridad, gobiernos locales y comunidades, sin contar con un plan definido, sin sistema de inteligencia organizado y fortalecido que respalde el ejercicio operacional. Su vulnerabilidad a factores externos destaca la necesidad de estrategias integrales y cohesivas, así como una mayor cooperación internacional en temas de seguridad.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con alta influencia y baja dependencia, desempeñan un papel clave en la seguridad. Sin embargo, su autonomía operativa requiere una mejor alineación con políticas nacionales, además de mayor tecnificación en su accionar operativo, asegurando la disponibilidad de recursos y medios necesarios para su misión.

En este punto, se concluye que, para confrontar al crimen organizado transnacional, la solución no solo es ampliar jurídica y constitucionalmente las potestades de las Fuerzas Armadas a nivel del orden público y seguridad interna, sino también cuestionar y ampliar el enfoque de soberanía frente a amenazas centrales para el Estado (Andrade 2024).

Finalmente, las disidencias de las FARC y estructuras criminales, autosuficientes en financiamiento y logística, explotan las debilidades institucionales para expandir sigilosamente su control territorial, lo que demanda acciones contundentes para desarticular sus redes. Además, el área de Petroecuador, las comunidades locales y los contratistas mantienen alta dependencia pero baja influencia, y, por lo tanto, se hallan en estado de vulnerabilidad. Esto sugiere fortalecer la seguridad y la gobernanza local, con estrategias asociadas a proteger el sector energético y la resiliencia comunitaria.

Generación de escenarios prospectivos al 2030. Análisis morfológico

El análisis morfológico identifica dimensiones clave en el espacio morfológico, en este caso, las estructuras delictivas, la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y la corrupción institucional. Estas dimensiones proyectan hipótesis a futuro sobre la evolución del crimen organizado en zonas petroleras de Sucumbíos y Orellana.

El análisis permite construir escenarios prospectivos al 2030. El objetivo es analizar la progresión delictiva para, en función de aquello, reducir riesgos y diseñar estrategias enfocadas en una gobernanza eficiente en las zonas (Iturralde 2022).

En la tabla 3 se detalla cada dimensión de acuerdo con las variables estratégicas que han sido procesadas previamente en *software*. Se otorga una visión estructurada de escenarios potenciales a futuro.

Tabla 3. Análisis morfológico para escenarios progresión delictiva

Dimensión	Evolución negativa (H1) Corto plazo de 1 a 3 años	Evolución tendencial (H2) Mediano plazo de 3 a 10 años	Evolución positiva (H3) Largo plazo +de 10 años
(D1) Sinergia entre la seguridad y el sector petrolero	Colaboración mínima entre seguridad y empresas petroleras, que deja infraestructuras vulnerables al crimen organizado.	Colaboración moderada, con medidas de seguridad reactivas, con protección parcial de las instalaciones.	Colaboración parcial y proactiva, con fuerzas de seguridad y empresas coordinadas para proteger eficientemente el sector.
(D2) Relaciones operativas y financieras de las estructuras criminales	Redes criminales fortalecidas con acceso ilimitado a recursos financieros y operativos, lo que facilita su expansión.	Operaciones criminales constantes pero limitadas a territorios específicos, flujos financieros ilegales continuos.	Control relativo de las principales estructuras criminales, con interrupción moderadas de flujos financieros y operativos.
(D3) Disidencias de las FARC	Consolidación total del control territorial en zonas estratégicas, lo que aumenta la cooptación de comunidades locales, especialmente en Orellana.	Presencia focalizada pero estratégica en Orellana y Sucumbíos, con acciones progresivas hacia el sector petrolero.	Reducción significativa de su influencia mediante acciones de seguridad coordinadas y apoyo a comunidades vulnerables.
(D4) Eficacia de las políticas de seguridad	Políticas ineficaces y descoordinadas, que favorecen la expansión del crimen organizado.	Políticas parcialmente efectivas, con capacidad limitada para contener las amenazas delictivas.	Políticas razonablemente efectivas y parcialmente implementadas, que contribuyen de manera moderada a disuadir actividades ilícitas y mejoran la gobernanza en aspectos clave.
(D5) Infraestructura y seguridad de las instalaciones petroleras	Alta vulnerabilidad con frecuentes sabotajes, extorsiones, secuestros y afectaciones graves a las operaciones.	Vulnerabilidad en varios sectores, con medidas de seguridad limitadas o inexistentes en algunos casos y concentradas principalmente en instalaciones prioritarias.	Infraestructuras completamente protegidas, con sistemas avanzados de monitoreo y rápida capacidad de respuesta.
(D6) Presencia de organizaciones criminales transnacionales	Incremento sostenido de grupos transnacionales que dominan áreas estratégicas y rutas de tráfico ilícito.	Presencia continua en regiones específicas como Orellana y Sucumbíos, con actividades delictivas recurrentes pero localizadas, monitoreo y control permanente para mantener la hegemonía.	Reducción notable de grupos transnacionales gracias a operativos de seguridad multinacionales.
(D7) Niveles de corrupción en las instituciones gubernamentales	Corrupción generalizada que facilita la infiltración del crimen organizado y compromete las medidas de seguridad.	Corrupción localizada en niveles medios y bajos, dificultando eficacia de algunas políticas de seguridad.	Transparencia institucional en desarrollo, con medidas anticorrupción en proceso de implementación y una mejora gradual en la confianza pública.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 no presenta resultados finales, sino una descripción cualitativa de las dimensiones que intervienen en la problemática y de cómo podrían evolucionar a futuro según las hipótesis negativa, tendencial y positiva. Este paso es propio del método morfológico, que primero organiza el problema en posibilidades para cada dimensión antes de combinarlas. Lo que se muestra aquí es básicamente el mapa de opciones que cada variable podría seguir según el contexto analizado.

A partir de ese conjunto de trayectorias, en la tabla 4 se las combina para construir los escenarios prospectivos. Es decir, la tabla 3 define el espacio posible y la tabla 4 muestra cómo ese espacio se articula para proyectar los escenarios posibles al 2030.

Tabla 4. Resultados del análisis morfológico combinaciones para escenarios

Escenario pesimista						
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
H1	H1	-	H1	-	H1	H1
Escenario tendencial						
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
H2	H1	H2	H1	H2	H2	H1
Escenario apuesta						
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
H2	H1	H2	H1	H2	H2	H1

Fuente: elaboración propia.

La tabla 4 muestra cómo se combinan las trayectorias posibles de cada dimensión y permite visualizar tres caminos hacia el 2030. En el escenario pesimista, casi todas las variables caen en hipótesis negativas, lo que refleja un ambiente donde el crimen organizado se fortalece, las disidencias amplían su control y la coordinación institucional sigue siendo mínima. En el escenario tendencial, los avances son parciales y las vulnerabilidades persisten, por lo que la situación se mantiene similar a la actual; los problemas no empeoran del todo, pero tampoco se resuelven.

El escenario apuesta combina elementos que dejan ver la posibilidad de mejoras graduales, sobre todo si la coordinación entre seguridad y sector petrolero se fortalece y se sostienen acciones para limitar la influencia criminal. En conjunto, estos escenarios muestran que el futuro dependerá de cómo interactúan factores como seguridad, corrupción, economía ilegal y presencia territorial de grupos delictivos.

Conclusiones

Factores como debilidad institucional y reducida presencia estatal en sitios vulnerables son concluyentes en la expansión del crimen organizado en Orellana y Sucumbíos. La presencia de las FARC, Los Lobos y Los Choneros, consideradas estructuras delictivas como disidencias, aunque no están de manera permanente vinculadas a actividades de la industria petrolera, son detonantes de la inseguridad. Subestimar esta amenaza ha devenido en deficientes políticas de seguridad específicas.

En este escenario, se considera la participación de actores clave, como el Gobierno nacional, con el objetivo de frenar el avance del crimen organizado. Su intervención se centra principalmente en acciones de seguridad de carácter reactivo, debido a la ausencia de políticas públicas específicas y sostenibles a largo plazo. De su lado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al no contar con recursos y medios necesarios, ejecutan acciones operativas limitadas en efectividad. En contraste, las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales, aprovechándose de esta debilidad, han logrado expandir su sigiloso control territorial, y generar un ambiente de vulnerabilidad en las comunidades locales, empresas contratistas y actores estratégicos como Petroecuador.

Los escenarios pesimistas, tendenciales y de apuesta sobre la progresión del crimen organizado en las zonas petroleras de Orellana y Sucumbíos determinan que en el escenario pesimista al 2030 el crimen organizado se consolida en estas zonas y afecta directamente las operaciones petroleras. Las disidencias de las FARC y grupos nacionales como Los Choneros y Los Lobos logran hegemonía territorial al someter a las comunidades locales y debilitar la presencia del Estado. La corrupción en instituciones gubernamentales y de seguridad incrementa la vulnerabilidad, mientras que falta de colaboración entre actores públicos y privados expone infraestructuras petroleras a sabotajes, secuestros y extorsiones. Las operaciones ilegales de grupos transnacionales se multiplican; esto genera un entorno de violencia e inestabilidad, lo que desincentiva inversión extranjera y acelera el deterioro económico del país, dada su dependencia del petróleo.

El escenario tendencial indica que el avance del crimen organizado en el sector petrolero de Sucumbíos y Orellana sigue un ritmo moderado. Las disidencias de las FARC intentan consolidar su control en poblaciones fronterizas, mientras que grupos criminales nacionales buscan expandir su influencia en áreas estratégicas. A pesar de ligeras mejoras en políticas de seguridad, la corrupción y la fragmentación institucional dificultan una contención efectiva. La ubicación estratégica del sector petrolero y el crecimiento de la actividad empresarial local han facilitado el lavado de activos, sobre todo en servicios de transporte, hotelería, maquinaria, logística y otros, utilizados por redes criminales para infiltrar flujos ilícitos. Las infraestructuras petroleras continúan siendo altamente vulnerables, lo que incrementa riesgos operativos y financieros en la región.

En el escenario apuesta inicialmente hasta el 2030 se determina que el enfoque coordinado entre el Gobierno, las empresas petroleras y comunidades locales permite contener

parcialmente la expansión del crimen organizado en Sucumbíos y Orellana. Las políticas de seguridad, aunque no perfectas, muestran una mayor efectividad, mientras que la colaboración público-privada se fortalece al implementar operaciones de inteligencia y medidas preventivas. Las disidencias de las FARC y otros grupos criminales enfrentan obstáculos significativos en sus operaciones, por auditorías financieras y estrategias de contención focalizadas. Aunque persisten los problemas, se logra un equilibrio operativo que reduce el impacto del crimen organizado y asegura mayor estabilidad en el sector petrolero.

Finalmente, los factores estructurales y dinámicos que configuran el entorno de riesgo en estas regiones indican un nivel de vulnerabilidad de las comunidades que se han visto expuestas a la violencia, la extorsión y delitos asociados. En consecuencia, las localidades se hallan en constante ciclo de dependencia de estos grupos delictivos y de exclusión. Esto perpetúa la desigualdad y también la inseguridad.

Además, las poblaciones se ven confrontadas a otras problemáticas como la explotación de recursos naturales, lo que afecta no solo al medio ambiente sino también a su calidad de vida. La falta de recursos económicos para el desarrollo local y las tensiones internas han sido puntos críticos que han elevado la vulnerabilidad en las zonas.

Bibliografía

- Álvarez, Carla. 2024. *¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador*. Ginebra: OECO. <https://bit.ly/4gATytA>
- Amazon Watch y Amazon Underworld. 2025. *En las sombras del Estado: economías ilícitas y control armado en la triple frontera de Colombia, Ecuador y Perú*. Washington: UK International Development. <https://bit.ly/4aDMwF5>
- Andrade, Miguel. 2024. “Ampliando el enfoque de la soberanía: Fuerzas Armadas de Ecuador frente al crimen organizado transnacional”. *Revista Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos* 1 (18): 101-120. <https://n9.cl/a098u>
- Banco Central del Ecuador. 2024. *Impacto del sector petrolero en la economía ecuatoriana*. Quito: BCE. <https://bit.ly/3ABCDE>
- Baños, Limber. 2023. “Inseguridad y aumento de la delincuencia organizada”. *Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público* (6): 63-70. <https://urli.info/1j9Bk>
- Bravo, Carlos. 2023. “Gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador”. *Revista Logos Ciencia & Tecnología* 15 (2): 49-69. <https://doi.org/10.22335/rlct.v15i2.1734>
- Buscaglia, Edgardo. 2015. *Vacíos de poder en México: Cómo combatir la delincuencia organizada*. México: Debate.
- Cárdenas, Santiago, Mayeixi Pita, Hugo Chavarrea e Isaac Cárdenas. 2023a. “Luces y sombras en la justicia ecuatoriana. Explorando la corrupción en la actualidad”. *Ciencia y Educación* 4 (9): 15-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8325905>

- Cárdenas, Santiago, Mayeixi Pita, Hugo Chavarrea e Isaac Cárdenas. 2023b. “La evolución y consecuencias de la delincuencia organizada y el narcotráfico en el Ecuador. The evolution and consequences of organized crime and drug trafficking in Ecuador” *Ciencia y Educación* 4 (8): 1-48.
- Carvajal, Richard, y Diego Maldonado. 2023. “Nuevas guerras y transformación del crimen organizado transnacional al crimen desordenado, fragmentado y volátil en Ecuador”. *Innovación y Saber* 6 (1): 71-80
- Castillo, Andrés, y Xiomara Castro. 2022. “El rostro de la violencia social y estructural: La delincuencia y pobreza como expresiones distintas de una vulnerabilidad común”. *Revista de Ciencias Sociales* 0 (133-134): 113-124.
<https://doi.org/10.15517/rcs.v0i133-134.3863>
- Conde, Fernando, y Marlo Orbe. 2020. *Grupos irregulares armados en conflicto de la frontera colombo-ecuatoriana y su relación con el narcotráfico*. Quito: Military Review.
<https://bit.ly/4iVIb0N>
- Di Virgilio, María. (Ed.). 2011. *Pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe*. Quito: CLACSO. <https://bit.ly/4iCbyWa>
- Ferreira, Marcos. 2025. *Organizaciones criminales y gobernanza criminal*. Madrid: Fundación Carolina. https://doi.org/10.33960/AC_11.2025
- Fontaine, Guillaume. 2019. “Los conflictos ambientales por petróleo y crisis de gobernanza ambiental en Ecuador”. *Boletín ECOS* (6): 2-7. <https://bit.ly/4bZ3PyZ>
- Fundación Ecociencia. 2024. “Expansión de la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana (zona Punino)”. <https://bit.ly/41ZeaGC>
- Fundación Periodistas Sin Cadenas. 2023. “La prensa en Sucumbíos, bajo presión estatal y amenazas criminales”,
<https://www.periodistassincadenas.org/la-prensa-en-sucumbios-bajo-presion/>
- Garrochamba, Ángel. 2021. Factores criminógenos sociales que generan delitos de contrabando de combustible y gas licuado de petróleo. Tesis de maestría, Uniandes. <https://bit.ly/3FEGfLW>
- Garzón, Juan. 2018. *Inseguridad, violencia y economías ilegales en fronteras*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. <https://bit.ly/4bKArMT>
- Godet, Michel. 2000. *La caja de herramientas de la prospectiva estratégica*. Madrid: Cuadernos de LIPS. <https://bit.ly/4kUHqH8>
- Gómez, Jorge. 2013. “La minería ilegal como la amenaza más importante para la seguridad nacional: el caso de las FARC”. *Revista Estudios en Seguridad y Defensa* 8 (15): 76-86.
<https://n9.cl/yuhum>
- Grupo Faro. 2020. *Crimen organizado y minería ilegal en Ecuador: Diagnóstico y recomendaciones*, Quito: Grupo Faro. <https://bit.ly/3XYZDEF>
- Guadalupe, Kevin. 2023. “Impacto de la actividad petrolera en finanzas de Ecuador”. *Reciamuc*, 6 (1): 284-293. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/6.\(1\).enero.2022.284-293](https://doi.org/10.26820/reciamuc/6.(1).enero.2022.284-293)
- Iturralde, David. 2022. “Prospectiva estratégica en lucha contra el crimen organizado en la Amazonía ecuatoriana”. *Revista de Análisis Prospectivo* 5 (3): 88-109.

- Jackson, Jay. 2020. "Realistic group conflict theory". *The Psychological record* 43: 345-414. <https://acortar.link/7olBP8>
- Jurado, Miguel. 2021. Impacto de la inversión pública en dinámicas de deforestación en la provincia de Sucumbíos (2007-2019). Tesis de maestría, FLACSO Ecuador. <https://bit.ly/4kYru6H>
- León, Daniel. 2021. Análisis prospectivo al 2030 de la delincuencia organizada en Ecuador. Caso: San Lorenzo-Esmeraldas. Tesis de maestría, IAEN.
- López, José. 2024. "Tendencias sobre política criminal en Ecuador: Desafíos en protección de derechos ciudadanos". *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía* 8 (2): 925-948. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i2.3000>
- Luna, Mauricio, y Hai Luong. 2022. "El narcotráfico como crimen organizado: Comprendiendo el fenómeno desde la perspectiva transnacional y multidimensional". *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad* 16 (1). <https://doi.org/10.18359/ries.5412>
- Marcelles, Carlos. 2021. "Maldición de los recursos: Un análisis comparado de resultados de la explotación petrolífera en Noruega y Nigeria". *ICADE* 57: 1-12. <https://bit.ly/43S26cQ>
- Marín, Paúl, y Washington Astudillo. 2024. "Incremento de delincuencia organizada como factor de crisis en el Estado Ecuatoriano año 2023". *MQR Investiga* 8 (4): 1854-1873. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.4.2024.1854-1873>
- Mejías, Alda. 2021. *Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina*. Madrid: Fundación Friedrich Naumann.
- Mojica, Francisco. 2005. *La construcción del futuro: Concepto y modelo de prospectiva estratégica, territorial y tecnológica*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia
- Montero, Luis, y Jorge Mejía. 2018. *Narcotráfico y Minería Ilegal como factores disruptivos en control territorial*. Bogotá: Ediciones Uniandes. <https://bit.ly/43U0cs9>
- Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado OEEO. 2023. Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador. Quito: OEEO. <https://oeeo.pdf.org>
- Pérez, Javier. 2022. Estrategias para incrementar el grado de control de la frontera Norte ante la presencia de las diferentes amenazas y riesgos a la seguridad del país (narcotráfico, contrabando, migración, grupos armados y organizados al margen de la ley). Tesis de maestría, ESPE. <https://n9.cl/gxeg7>
- Pino, César. 2024. "Estrategias de grupos criminales en la Amazonía: Un estudio de casos". *Revista de Criminología Comparada* 21 (2): 99-127.
- Rendón, Moisés, Linnea Sandín, y Claudia Fernández. 2020. "Minería Ilegal en Venezuela: Muerte y Devastación en Regiones del Amazonas y Orinoco. Center for Strategic International", <https://bit.ly/3FDpC3b>
- Rivera, Renato, y Bravo, Carlos. 2020. "Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en economía del narcotráfico". *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad* 28(1): 1-30. <https://bit.ly/4bZHOjv>

- Rivera, Rohn, Andrés Ormaza, y Alicia Contero. 2023. *Caracterización del crimen organizado. Informe en Ecuador*. Quito: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
- Tapia, Consuelo, y Christian Fierro. 2024. “El crimen organizado en el Ecuador y su relación con administración de justicia”. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 5 (4): 524-535. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2270>
- Univalle. 2015. *Árbol de competencias de Giget. Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento; Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento*. Cali: Universidad del Valle. <https://bit.ly/4iZX9Ty>
- Valencia, Alexandra. 2024. “Fuel theft, violence siphoning \$215 million from Ecuador oil industry”. *Reuters*, 12 de diciembre. <https://bit.ly/3FuTY7V>
- Velosa, José, y Martha Pachón. 2023. *El análisis morfológico en la prospectiva. Caso aplicado a formación de líderes de proyectos del futuro*. Bogotá: EAN Universidad. <http://hdl.handle.net/10882/13073>
- Vestidora, Elena, y Jonas Wolff. 2024. “De la inestabilidad política al conflicto armado interno: La múltiple crisis de Ecuador”. *Revista de Ciencia Política* 44 (2): 1-12. <https://doi.org/10.4067/s0718-090x2024005000107>
- World Economic Forum. 2020. “*The Global Risks Report 2020*”, <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020>